





EN RESUMEN

19° Informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú

Los primeros meses del nuevo gobierno

Los conflictos sociales mineros han marcado el inicio de las legislaturas de los últimos gobiernos desde Alejandro Toledo; un hecho que se ha vuelto a repetir en estos primeros meses del gobierno de Kuczynski que, pese a la previsibilidad del escenario, se vio sorprendido por el conflicto Las Bambas que se saldó con la muerte de una persona. La actuación del Gobierno arroja **serias dudas sobre su estrategia en materia de conflictividad** social que adolece del carácter preventivo que requiere. Durante los dos primeros meses, hubo una actitud inmóvil que llevó a que recién el 1 de octubre nombraran a Rolando Luque como jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS).

El conflicto de Las Bambas puso en agenda dos temas de fondo sobre la inversión minera en Perú que plantean una reflexión seria:

1.- **Los convenios firmados entre la policía y mineras** (como Antamina, Xtrata, MMG, Yanacocha, Southern, entre otros) están envueltos en la opacidad a pesar de que debieran ser una información pública y transparente. Estos convenios generan una privatización de la fuerza pública al servicio de empresas privadas.

2.- Los ‘paquetazos ambientales’. El negativo impacto de estos se ha podido observar respecto al uso del Instrumento Técnico Sustentatorio (ITS), aprobado por el Decreto Supremo 054 del 2013. En el caso de Las Bambas, se modificaron hasta en cuatro ocasiones importantes componentes del proyecto minero a punta del ITS, este hecho generó el malestar de la población y fue uno de los motivos del conflicto estallado en Las Bambas.

El escenario minero y social en 6 claves

1. Contracción de la inversión minera. En el 2016, la producción minera se ha apuntalado y podría culminar con un PBI minero del 21%. Para los próximos años se espera una caída, de acuerdo al Marco Macroeconómico Multianual Revisado 2017-2019, el PBI de este sector crecería un 7.4% en el 2018, y apenas un 1.2% en 2019. Por otro lado, las exportaciones mineras apenas superarían los US$20.000 millones recuperando sólo el nivel de 2014 pero lejos del pico alcanzando en 2011 de US$26.952.

2. La región macrosur concentra la conflictividad social y la inversión minera. Apurímac, Arequipa, Moquegua, Ica, Puno, Tacna, Cusco registran más del 43% de los conflictos**.** Poniendo el foco sobre las regiones, Apurímac y Ancash encabezan la lista de los departamentos con mayor conflictividad.

3. Perú gana liderazgo en cobre. El ‘boom del cobre’, que comenzó en 2015, continuará impulsando a este sector; un crecimiento que ha logrado que Perú se posicione como segundo productor mundial de este metal, gracias a proyectos como: Toromocho, Constancia, Cerro Verde y Las Bambas.

4. Deterioro del aporte fiscal. Desde el 2012 se experimenta una caída del aporte de este sector a las arcas públicas. En 2016 se presenta una contracción del 30.4%; como consecuencia, se ha reducido la participación de la minería a los tributos internos: si en el 2007 representaba el 24.7%, en el 2016 representa tan solo un 5.4%. Sumado a ello, una tendencia que resulta de especial preocupación es que las mineras reciben más dinero del Estado del que pagan en impuestos. Las devoluciones realizadas por la SUNAT al sector minero, al mes de septiembre, sumaban S/.4.638, mientras el aporte de las mismas fue de S/.3.293. Otra de las consecuencias de este escenario minero es la caída drástica del canon minero que, entre 2012 y 2016, se ha reducido hasta en un 71%.

5. Menos territorio concesionado. Desde el 2014 se ha reducido el área concesionada a la minería, una tendencia correlacionada con la caída de la inversión a nivel mundial en exploraciones. Luego de

alcanzar un pico en el año 2013- más de 26 millones 800 mil hectáreas concesionadas- en noviembre se registran 19’241,911 hectáreas.

6. Consolidación de la minería ilegal. Madre de Dios y Puno son dos de los bastiones de la minería ilegal. En la región selvática la formalización sigue estancada, se sigue deforestando y contaminando con mercurio, además del grave incremento de la delincuencia, la trata de personas, la explotación sexual, entre otros impactos negativos.

A fondo

Macro región norte

La cartera de proyectos mineros en esta zona equivale a US$16.086 millones. Concentra el 30% de los conflictos sociales del país.

Piura: el retorno de Rio Blanco. Esta región representa el 5,70% de la actual cartera de inversión. En esta región destaca el retorno -después de seis años de retiro- del emblemático proyecto Río Blanco. El Ministerio de Energía y Minas aprobó un plan de rehabilitación y ha suscrito un convenio de promoción del proyecto: se anuncia una inversión no menor a los US$ 2.500 millones. En la zona se especula que podría ser un pretexto para que la empresa continúe con sus actividades de exploración, y en un futuro, de explotación. La minera ha anunciado que podría iniciar la fase de explotación minera en el año 2021.

La minería informal ha protagonizado uno de los principales conflictos sociales en torno a la minería. Tan solo una empresa-de las más de mil que trabajan en la zona- ha logrado formalizarse mediante el proceso amparado bajo el Decreto Legislativo N°1105.

Cajamarca: Máxima y varios temas que continúan en la agenda. Esta región ha retomado al primer lugar en la cartera de inversiones en el sector minero: asciende a US$10.432 millones comprometidos, representando el 22.42% del total de la cartera. Ocupa el cuarto lugar en cuanto al número de conflictos sociales.

Se debe destacar el logro de la resolución ministerial del Ministerio del Ambiente declarando la emergencia ambiental para descontaminar los ríos de la provincia de Hualgayoc (Bambamarca). Por otro lado, agricultores de Celendín y Cajabamba mantienen su oposición al proyecto hidroeléctrico Chadín II que busca construir la controvertida empresa brasileña Odebrecht.

En relación a Conga, Grufides continúa con la defensa legal de campesinos criminalizados, destacando el caso de Máxima Acuña y su familia que sigue siendo hostigada.

La Libertad aparece en el mapa de conflictos. Se ha convertido en la principal zona del país productora de oro; aunque en la cartera de proyectos apenas representa el 1.38%.

En esta zona del país se desarrolla una intensa actividad minera informal que en algunos casos establece niveles de colaboración y acuerdos con empresas formales. Durante la primera semana de noviembre estalló un enfrentamiento entre la comunidad Alpamarca (Pataz) y la Policía Nacional, que se cobró la vida del comunero Pedro Valle Sandoval y heridos por ambas partes.

Ancash: conflictos numerosos y de baja intensidad. En la actualidad, esta región apenas representa el 1.66% de la cartera de proyectos de inversión minera. En los próximos años la producción minera de la región se irá reduciendo debido a que unidad Pierina (Barrick) se encuentra en proceso de cierre a causa del agotamiento de las reservas de mineral. En el caso de Antamina, segundo productor de cobre del país, su vida útil se proyecta hasta el 2029.

De los 12 conflictos mineros identificadas por la Defensoría del Pueblo, 10 están vinculados a la gran minería, específicamente en las zonas de influencia de Antamina (siete casos) y Barrick Misquichilca (tres casos). Del total de conflictos, el 25% estarían vinculados al recurso hídrico: ya sea por contaminación o incumplimiento de acuerdos.







La mayoría de los conflictos vinculados a minería pasan por procesos de mesas de diálogo o reuniones en las que participan las comunidades, empresa y agencias del Estado, sin embargo, los reportes de Defensoría dan muestra de procesos prolongados de negociación con propuestas no satisfactorias y reiterados incumplimientos.

Amazonas. Pese a que no aparece en el ranking de regiones con actividad minera y las concesiones mineras reflejan una limitada actividad, lo cierto es que se siguen otorgando derechos mineros en la zona norte de la región, en parte del territorio indígena awajún: una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta. Además, se han otorgado más de 500 mil metros cuadrados de la Cordillera del Cóndor (denominado punto caliente de la diversidad mundial) a la empresa minera Afrodita para que explote oro en plena cuenca amazónica. La minera ya instaló su campamento y maquinaria en la zona. La situación en la zona es de alta tensión.

Por otra parte, desde hace más de cinco años las comunidades indígenas vienen denunciando ante el Poder Judicial, la Policía y el Ejecutivo la proliferación de mineros ilegales en las cuencas de los ríos Santiago y Cenepa sin que el Estado dé una respuesta.

Macro centro

Concentra en la actualidad apenas el 7.44% de la cartera de proyectos mineros, y el 14% de los conflictos.

Junín y los conflictos de larga data. Representa el 5.17% de la cartera de proyectos mineros. Destacan los conflictos mineros de La Oroya y Morococha. Sobre el primer caso, el Congreso en agosto modificó la Ley General del Sistema Concursal que abrió la posibilidad a la empresa liquidadora de Doe Run Perú (Dirige) de contar con un tiempo mayor para vender el Complejo Metalúrgico de La Oroya y la mina Cobriza. La Junta de Acreedores de Doe Run acordó mantener vigente el convenio de liquidación hasta el 27 de agosto de 2017.Aunque no se ha hecho pública la lista oficial de interesados, según el MINEM el presidente de la República habría tenido una reunión en China con alguno de los consorcios interesados en comprar los activos de Doe Run.

Sobre el caso Morococha, se desarrollaron desde el mes de julio una serie de reuniones sobre el proceso del reasentamiento en el marco de la Mesa de Diálogo. En cuanto a la marcha de la mina Toromocho, en agosto la empresa señaló que bajaría el estimado de la producción de cobre con respecto a lo proyectado el año pasado, entre 6% y 12%. Asimismo, en septiembre la minera Chinalco recibió una propuesta de la subsidiaria del holding Aluminium Corporation of China Limited para ejecutar un proceso de inyección de capital para impulsar la mina.

Pasco. Esta región se ubicó en los primeros puestos en la producción de plomo -liderando la minera Volcan- y zinc. Algunos conflictos continúan latentes y sin solución, como la oposición de la población de Cahaupimarca y Yanacancha a la ampliación de tajo abierto de explotación minera y a la empresa administradora Cerro SAC en la ciudad de Pasco. También figura en la región el conflicto entre la comunidad campesina San Juan de Yanacocha y la minera Buevantura por contaminación de recursos naturales. Por otra parte, el Área de Reserva Comunal El Sira ha continuado siendo amenazada por los mineros ilegales.

Macro sur

Es el principal destino de las inversiones mineras, concentra una cartera de proyectos que asciende a 26.869 millones de soles. Asimismo, lidera la conflictividad social pues concentra el 42.5% del total de conflictos registrados en el país.

Apurímac: conflicto de coexistencia y de alta intensidad. Esta región ha pasado al segundo lugar en la cartera de proyectos de inversión minera. El proyecto minero Las Bambas ha marcado la agenda de la región. Ya ha transcurrido más de un año desde que se instaló la mesa de diálogo y lo cierto es que no se perciben avances. El conflicto surge por las cinco modificaciones que se dieron al proyecto minero en un lapso de 20 meses, unos cambios que generaron malestar, especialmente la sustitución del mineroducto por una carretera sin pavimentar por la que transitan más de 300 camiones y

vehículos transportando mineral y materiales. Por otro lado, las comunidades exigen que se les pague por las tierras que ocupa la carretera, lo cierto es que la mencionada carretera ha pasado a figurar en el inventario nacional pasando a manos del Estado. Este tema viene siendo tratado en la mesa de diálogo. Por otro lado, el aspecto económico también está en la base de los reclamos; no hay que olvidar que el proyecto generó grandes expectativas para unas de las poblaciones más pobres del país que sigue sin verse beneficiada.

Las Bambas se ha convertido en un típico conflicto de coexistencia, dependerá de la capacidad de todos los actores involucrados y sobre todo, del Estado central, identificar las demandas legítimas y convertir el actual escenario en un conflicto de baja intensidad.

Cusco y una agenda social que se complica y amplifica. Desde el 2016, esta región se viene consolidando como una de las principales productoras de cobre en el país. El flujo de la inversión minera se ha reducido cerca de un 20% y solo concentra el 2% de toda la cartera de proyectos. En el último informe de la Defensoría aparece Cusco entre las cinco regiones con mayor número de conflictos sociales. Destacan, por un lado, los casos con la gran minería en Espinar (Glencore) y Chumbivilcas con la mina Constancia (Hudbay); con la mediana y pequeña minería informal en los distritos de Quiñota (Chumbivilcas) que involucra a la empresa Anabi, en Camanti (Quispicanchis), ante el avance de la minería en territorios ancestrales (nevado Quyllluri´ti).

En el caso de la provincia de Espinar, desde el OCM, se viene alertando sobre un posible escenario de conflicto. Cabe señalar que el próximo año (mayo 2017) se cumplirán cinco años del último estallido social (mayo 2012) y sin embargo, la agenda que originó dicha movilización no ha sido atendida hasta el momento: problemas de salud (se confirmó la presencia de metales pesados en 180 personas en las comunidades de Huisa y Alto Huancané), contaminación ambiental y demandas de desarrollo. También preocupa la criminalización y judicialización de autoridades y dirigentes de Espinar que participaron en el paro de mayo de 2012, actualmente se encuentran bajo proceso judicial 15 personas, entre las que figura el exalcalde Oscar Mollohuanca. Por otro lado, los reiterados accidentes de transportes de mineral y otras sustancias vinculadas al proceso minero continúan alertando a las comunidades de Chumbivilcas y Espinar, zona de paso del corredor minero del sur andino.

Madre de Dios, en compás de espera. La minería ilegal ha continuado expandiéndose en el territorio de la región. Entre diciembre de 2015 y mayo de 2016 se habrían deforestado 353 hectáreas en la Reserva Nacional Tambopata; y entre julio y setiembre del presente año la deforestación se había incrementado en 100 hectáreas adicionales. Además, según información del Ministerio de Energía y Minas, entre enero y setiembre de 2016 la producción informal de oro ascendió a 19.1 TM lo que representa el 17% de la producción nacional de oro, superando el total de lo producido en 2015.

No se cuenta con información respecto a las acciones realizadas y los resultados alcanzados en el marco de las declaratorias de emergencia aprobadas por el anterior Gobierno en dos ocasiones durante un periodo de 60 días cada uno. Lo cierto es que las medidas de interdicción se muestran insuficientes. Por su parte, tanto el Gobernador de Madre de Dios, Luis Otzuka, como la Federación Minera de Madre de Dios – FEDEMIN, insisten en modificar el marco legal de la formalización. FEDEMIN ha propuesto modificar los decretos legislativos 1100 y 1105 para que se autorice el uso legal de dragas en los ríos, así como se amplíe nuevamente el plazo de la formalización hasta diciembre de 2017.

Arequipa: entre demandas de regalías y el estrés hídrico. Sigue figurando como la primera productora de cobre del país, luego de la entrada en producción de la ampliación de Cerro Verde. Actualmente, ocupa el cuarto lugar en la cartera de proyectos de inversión.

Se registran apenas 5 conflictos que representan el 2.4% del total nacional. Los casos de conflictos en Arequipa abarcan temas vinculados a demandas de pagos de regalías, los problemas de estrés hídrico, minería informal y negociaciones entre poblaciones y empresas mineras. La demanda de regalías apunta a la empresa Cerro Verde. Congresistas de esta región han cuestionado a esta empresa minera por negarse a pagar las regalías mineras correspondientes a los años 2006, 2007 y 2008.

En septiembre, el Ejecutivo decretó la emergencia hídrica en el Valle del Tambo. Un tema de cuestionamiento en los últimos años en torno al proyecto Tía María ha sido el insuficiente e ineficiente estudio hidrogeológico presentado por la minera Southern el año 2013. Otro tema de permanente tensión en la región es la presencia de mineros informales en varias provincias de la región, que están organizados en la Federación de Mineros Artesanales de Arequipa (FEMAR).

Moquegua, el agua y la minería. Moquegua figura en el tercer lugar en la cartera de proyectos de inversión minera, con una participación de 13.3%, aparecen la ampliación de Cuajone, Quellaveco, Los Calatos, San Gabriel, entre otros .El caso más antiguo y que hasta ahora no se logra solucionar es el que confronta al Frente de Defensa de Torata a la empresa Southern Perú. El otro tema que aparece en agenda de la región es el de la represa de Paltuture, que involucra a tres regiones -Arequipa, Moquegua y Puno-, que tienen miradas distintas y donde se cruzan aspectos que van desde la compensación hídrica hasta problemas de demarcación territorial.

Tacna y una agenda que no cambia mucho. Tacna tiene una participación de 2.59% de la cartera de proyectos de inversión minera, El principal proyecto de inversión está vinculado a la antigua operación de Toquepala de Southern Perú, que se espera completar en el primer trimestre de 2018: se espera que aumente su capacidad de producción anual de 100 mil toneladas de cobre a 235 mil, así como una mayor producción de molibdeno.

Puno: conflictos en varios frentes. Puno tiene una participación de 2.97% de la cartera de proyectos de inversión minera como el de Corani, Santa Ana, La Poderosa, Aruntani, entre otros. Puno se sigue ubicando como una de las cuatro regiones con mayor conflictividad social: 18 conflictos entre activos y latentes. En el último semestre destaca el enfrentamiento ocurrido en la provincia de Melgar, en la zona de influencia del proyecto La Poderosa (ex Huacoto), que tiene como titular a la empresa SMC Solex del Perú; Por otro lado, la empresa canadiense Bear Creak ha anunciado que el año 2017 iniciará la búsqueda de financiamiento para el proyecto Corani. Es importante señalar que en diferentes distritos de la región continúan presentándose conflictos vinculados a la minería informal y/o abiertamente ilegal.